

ECONO-SIN

El pulso económico de Sinaloa



Colegio de Economistas de Sinaloa



colegioeconomistadelestadosinaloa

Abogados demandan la operación inmediata del Centro de Justicia Penal de Guasave ante rezagos en la impartición de justicia

Violencia digital genera afectaciones profundas en Sinaloa; Semujeres registra 25 casos y advierte impactos sociales y psicológicos

Autoridades interinstitucionales investigan el origen de la proliferación de moscos y malos olores en el norte de Culiacán concentrado.

Lluvias atípicas afectan cultivos del norte de Sinaloa y elevan riesgos de plagas y costos de producción

Inversión pública en Sinaloa: mucho monto, poca claridad en impacto económico



El anuncio de una inversión pública por 5 mil 123 millones de pesos distribuidos en 623 obras en Sinaloa merece una lectura económica más rigurosa que el simple recuento de proyectos. Desde la óptica del desarrollo, el dato central no es el volumen del gasto, sino su capacidad real para detonar productividad, competitividad regional y bienestar sostenible.

Una dispersión de recursos en cientos de obras plantea un primer cuestionamiento: ¿cuál es el retorno económico esperado por peso invertido? La fragmentación del gasto suele diluir impactos, elevar costos administrativos y dificultar la evaluación de resultados. Sin indicadores claros de costo-beneficio, productividad territorial o generación de empleo permanente, la inversión corre el riesgo de convertirse en obra visible, pero económicamente marginal.

El énfasis en infraestructura básica (agua potable, drenaje, carreteras) es necesario, pero no suficiente. Estas obras corrigen rezagos históricos, pero por sí solas no garantizan crecimiento económico, menos aún en un contexto donde la inseguridad, la baja inversión privada y la fragilidad institucional continúan inhibiendo decisiones productivas. La infraestructura sin un entorno de

certidumbre jurídica y seguridad termina operando por debajo de su potencial. Particular atención merece la intención de ejercer un crédito adicional por 2 mil 300 millones de pesos para centros deportivos y rehabilitación penitenciaria. Desde el punto de vista fiscal, el endeudamiento solo se justifica si genera retornos económicos medibles o ahorros futuros. En el caso de los centros penitenciarios, la inversión puede ser necesaria desde una lógica social y de seguridad, pero difícilmente es un motor de crecimiento económico directo, por lo que su financiamiento vía deuda debe evaluarse con extrema prudencia.

En materia carretera, la proyección de 400 kilómetros nuevos plantea otro dilema clásico de política pública: cantidad versus calidad. Sin una priorización basada en flujos productivos, cadenas logísticas y conectividad regional estratégica, el riesgo es construir tramos que mejoren la movilidad local, pero no la competitividad estatal.

Finalmente, el discurso oficial insiste en que "la obra no se ha detenido", pero omite un elemento clave: la evaluación *ex post*. Sin mecanismos transparentes de medición de impacto económico, empleo generado, productividad inducida o atracción de inversión privada, la inversión pública se convierte en gasto inercial, no en política de desarrollo.

Fuente: VivaVoz.

La percepción de inseguridad y su costo económico en Sinaloa

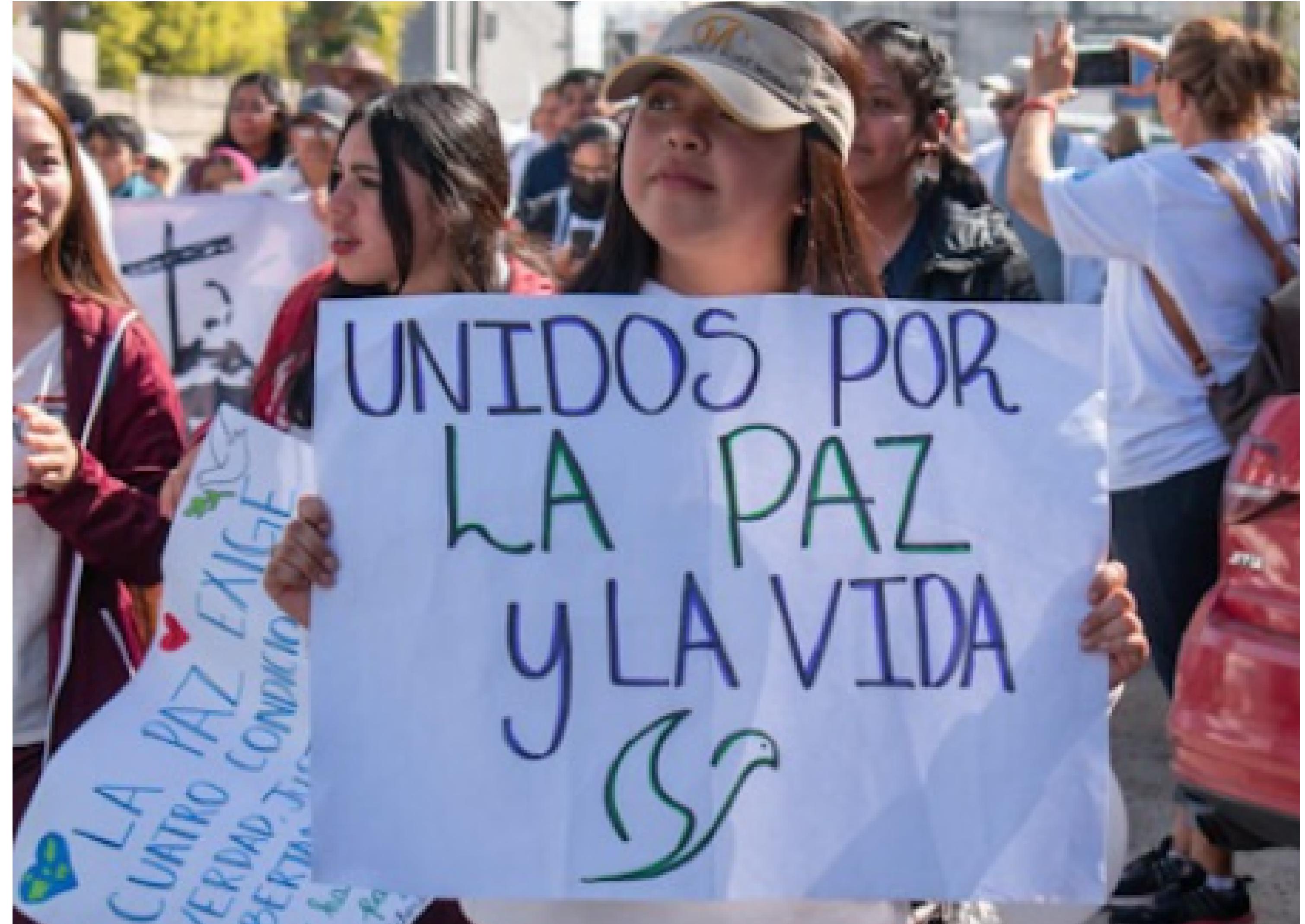
La percepción de inseguridad se ha convertido en uno de los factores que hoy más pesan sobre la economía de Sinaloa y no se trata de un fenómeno reciente ni coyuntural: el problema se ha prolongado por al menos un año y cuatro meses, tiempo suficiente para que el temor se incorpore a la vida cotidiana de los hogares y a las decisiones económicas de empresas y comercios.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, Culiacán Rosales continúa entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país, con 88.1 % de su población adulta considerando inseguro vivir en la ciudad. Si bien en la medición anterior Culiacán encabezaba el ranking nacional, en esta ocasión descendió un peldaño, no por una mejora sustancial en la percepción local, sino porque fue alcanzada y superada por Uruapan, Michoacán, que registró el porcentaje más alto de inseguridad percibida a nivel nacional.

El caso de Uruapan muestra cómo los hechos de alto impacto pueden modificar rápidamente el sentir social: en noviembre pasado fue asesinado su presidente municipal, Carlos Manzo, un acontecimiento que profundizó la percepción de violencia e ingobernabilidad en esa ciudad. Este tipo de episodios refuerza la idea de que la percepción no se mueve únicamente por estadísticas, sino por eventos visibles que alteran la confianza colectiva.

En Culiacán, la persistencia de altos niveles de percepción de inseguridad ha comenzado a generar efectos económicos claros. Los hogares reducen su consumo, limitan sus desplazamientos y evitan actividades nocturnas; los comercios enfrentan menor afluencia y horarios más restringidos; y las empresas incorporan mayores costos de seguridad o posponen decisiones de inversión; generando en un mercado interno más débil y una economía urbana que opera por debajo de su potencial.

La situación se agrava por la baja confianza en la capacidad de los gobiernos locales para



resolver los problemas más urgentes, así como por la presencia de corrupción en el contacto con autoridades de seguridad. Esta combinación eleva el riesgo percibido del territorio, encarece hacer negocios y reduce la competitividad regional frente a otras ciudades del país.

En términos económicos, la percepción de inseguridad funciona como un impuesto invisible: no aparece en las cuentas públicas, pero se paga todos los días en forma de menor consumo, menor inversión y menor crecimiento.

Fuente: Revista Espejo.

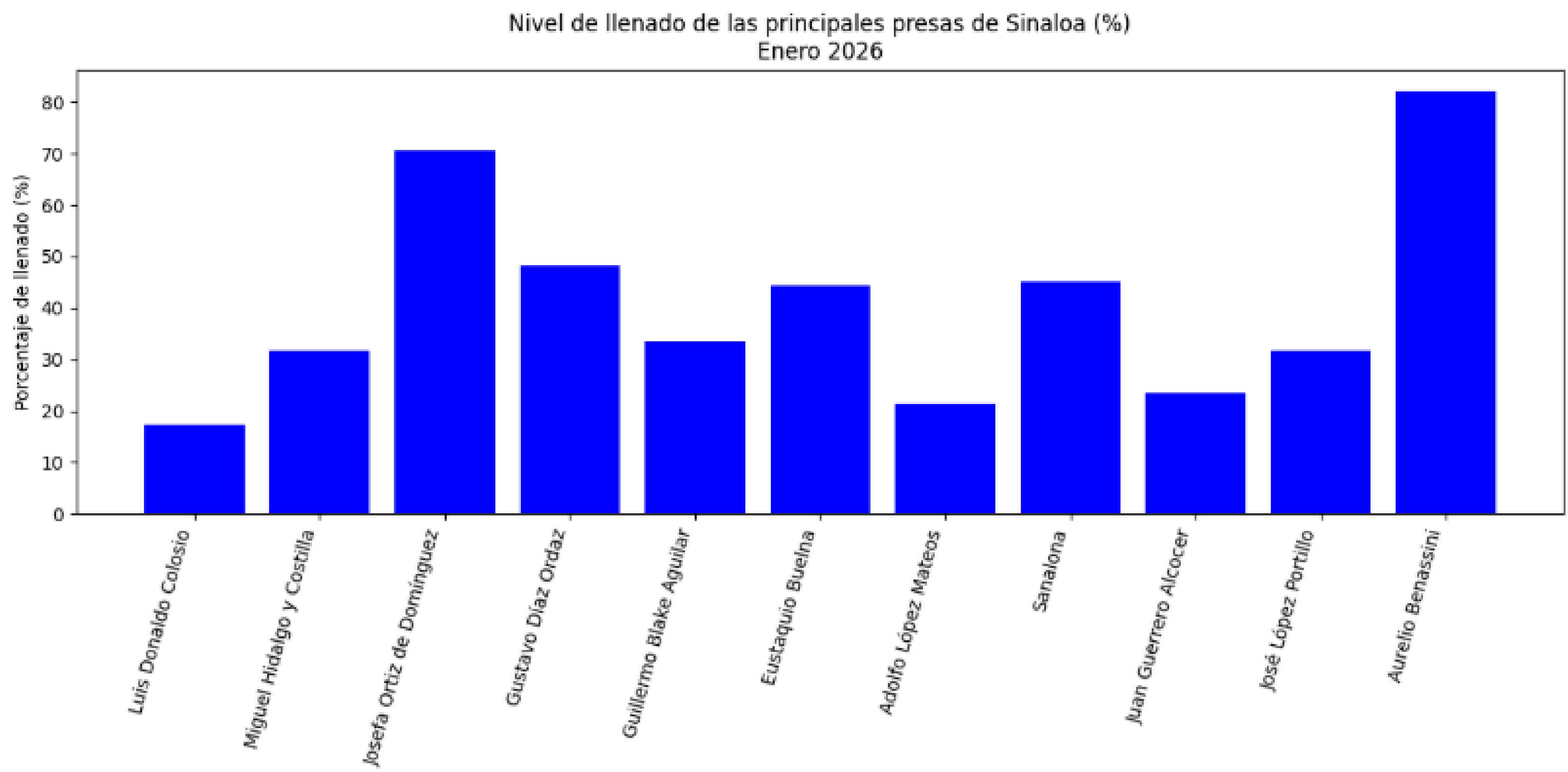
Tasa Objetivo
7.00
24-ENE-2026

TIE
Fondeo
7.09
23-ENE-2026

Cetes
28
7.00
20-ENE-2026

Inflación
3.77
1Q-ENE-25 a 1Q-ENE-26

Presas de Sinaloa: el costo económico de operar con solo 36.8% de almacenamiento



El más reciente reporte de la Organismo de Cuenca Pacífico Norte de CONAGUA confirma una realidad que ya se refleja en la economía estatal: las principales presas que abastecen a Sinaloa operan con apenas 36.8% de su capacidad total, una cifra que representa no solo un problema hídrico, sino un riesgo económico estructural para el estado.

En términos absolutos, el sistema de presas registra 6,377 millones de metros cúbicos almacenados, frente a una capacidad superior a los 24,700 Mm³, lo que limita severamente el margen de maniobra para el ciclo agrícola, el abasto urbano y la actividad industrial. Presas estratégicas como Miguel Hidalgo y Costilla (31.7%), José López Portillo (31.7%) y Luis Donaldo Colosio (17.2%) muestran niveles que, en condiciones normales, obligarían a activar protocolos de racionalización económica del agua.

Desde una perspectiva económica, el dato más relevante no es únicamente el nivel de almacenamiento, sino la tendencia negativa

interanual. El reporte señala una disminución acumulada de más de 2,600 Mm³ respecto a 2025, confirmando que el sistema hídrico entra a 2026 con menor resiliencia productiva. Esto anticipa presiones directas sobre la superficie sembrada, el empleo agrícola y los ingresos rurales, particularmente en distritos de riego altamente dependientes del sistema Humaya y del Fuerte.

Las transferencias de agua entre presas (como el traspaso de Luis Donaldo Colosio hacia Miguel Hidalgo, que ya acumula 124 Mm³) reflejan una gestión reactiva, más orientada a contener el problema que a resolverlo estructuralmente.

Estas decisiones, aunque necesarias en el corto plazo, elevan los costos operativos del sistema y reducen la eficiencia económica del recurso.

El impacto no se limita al sector agrícola. Un entorno de estrés hídrico sostenido incrementa los costos para el abasto urbano, presiona las finanzas municipales y desincentiva nuevas inversiones industriales, especialmente en actividades intensivas en

agua. En términos macroeconómicos, la baja disponibilidad hídrica actúa como un impuesto implícito al crecimiento, al restringir la expansión productiva y elevar la incertidumbre.

Con apenas 36.8% de almacenamiento en sus principales presas, Sinaloa enfrenta en 2026 un riesgo económico estructural que compromete la producción agrícola, el abasto urbano y la estabilidad de la inversión regional.